

Santiago, catorce de agosto de dos mil veintitrés.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 7° del artículo 483 A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante en relación con la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, que rechazó el de nulidad que interpuso en contra de la que no hizo lugar a la demanda ni a la acción de nulidad de finiquitos.

Segundo: Que la legislación laboral ha señalado que es susceptible del recurso de unificación de jurisprudencia la resolución que falle el arbitrio de nulidad, a cuyo efecto indica que procede cuando *«respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia»*, constituyendo requisitos de admisibilidad, que deben ser controlados por esta Corte, su oportunidad, la existencia de fundamento y una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones a que se ha hecho referencia. La norma exige, asimismo, acompañar copia del o de los fallos que se invocan de fundamento -artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo-.

Tercero: Que la recurrente plantea como materia de derecho objeto del juicio que pretende unificar, la *«determinación de la normativa aplicable a una persona natural contratada bajo la modalidad de honorarios por organismos del Estado, en cuanto a si las funciones desplegadas corresponden o no a los requisitos de contratación conforme a cometidos específicos y si estas se han ejecutado bajo índices de subordinación y dependencia.»*.

Cuarto: Que la sentencia impugnada, a propósito del recurso de nulidad, basado en las causales de los artículos 478 letra c) y 477 del Código del Trabajo, esta última en carácter de subsidiaria de la anterior y respecto de ciertos trabajadores demandantes, lo rechazó, argumentando que *«...en conclusión, el sentenciador de la instancia, establece por una parte que las funciones realizadas por la actora para la demandada corresponden a cometidos específicos y; por la otra, desde el fundamento Décimo Noveno en adelante, explica que no hay pruebas claras que den cuenta de la existencia de los elementos requeridos para la concurrencia de un vínculo de subordinación y dependencia, tales como control horario, jornada de trabajo, instrucciones por parte de la jefatura, o el reconocimiento de beneficios como feriados y licencias médicas.*



(...) Que, en tal contexto, no es posible compartir la opinión del recurrente, en cuanto a una errada calificación jurídica de los hechos».

Quinto: Que, para efectos de contraste, la recurrente acompaña las sentencias dictadas por esta Corte en los autos rol N°2.995-2018, 50-2018, 1.020-2018 24.676-2020 y 119.187-2020.

Todas ellas determinaron la existencia de una relación laboral entre una municipalidad y los demandantes, por no configurarse los presupuestos legales de la contratación en base a lo establecido en el artículo 4 de la Ley N°18.883, encontrándose determinados como hechos los elementos propios de la relación laboral.

Sexto: Que, como se aprecia, la materia de derecho propuesta en el recurso de unificación, en relación con la situación fáctica establecida y el razonamiento entregado por la judicatura del fondo, se distancia de lo resuelto en los fallos de contraste, puesto que en todos ellos, fueron acreditados a través de los medios probatorios, los supuestos de laboralidad que permitieron entender que en los hechos se estaba frente a una relación regida por el Código del Trabajo, elemento factual que dista de las conclusiones arribadas en el fallo que nos ocupa, en donde aquellos fueron descartados en atención a haberse establecido que las funciones de la demandante correspondían a cometidos específicos.

Así, al no concurrir identidad o similitud de antecedentes fácticos ni jurídicos, resulta imposible efectuar el cotejo que se requiere para la procedencia de este arbitrio excepcional y de derecho estricto, por lo tanto, sólo cabe declarar la inadmisibilidad del recurso deducido, teniendo particularmente en cuenta para así resolverlo, el carácter especialísimo y excepcional que le ha sido conferido por los artículos 483 y 483-A del Estatuto Laboral.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, **se declara inadmisibile** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de diecinueve de abril de dos mil veintitrés de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Regístrese y devuélvase.

N°84.498-2023.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema por los Ministros señoras Andrea Muñoz S., María Cristina Gajardo H., señor Diego Simpertigue L., ministro suplente señor Juan Manuel Muñoz P., y la abogada integrante señora María



Angelica Benavides C. No firma el Ministro señor Simpertigue y la abogada integrante señora Benavides, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con permiso el primero y por estar ausente la segunda. Santiago, catorce de agosto de dos mil veintitrés.



XTXJXHLLJB

En Santiago, a catorce de agosto de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

